

Doctora,

Maria del Tránsito Higuera Guío

**Juez 62º Administrativo Circuito Judicial de Bogotá – Sección Tercera.**

E.

S.

D.

<b>REF.:</b>	<b>Proceso:</b>	Reparación directa.
	<b>Demandante:</b>	Jacinto Rodríguez Rodríguez.
	<b>Demandados:</b>	Nación -. Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros.
	<b>Radicación:</b>	11-001-33-43-062-2024-00083-00.
	<b>Asunto:</b>	<b>Contestación de la demanda.</b>

**JUAN FELIPE TEJEIRO CARRILLO**, domiciliado en Bogotá, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de apoderado de la **GOBERNACIÓN DEL META**, de conformidad con el poder que me fue conferido y que aportó junto con este memorial, me permito presentar de manera respetuosa y oportuna **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA** en el proceso de reparación directa de la referencia, la cual fundamento bajo los siguientes términos a exponer:

**I. EN CUANTO A LOS HECHOS ENUNCIADOS EN LA DEMANDA.**

**DEL 1° AL 14°. NO ME CONSTA** los supuestos fácticos manifestados por la parte demandante en estos hechos, ya que son situaciones ajenas que no conoce ni debía conocer mi representada, por lo que se estará a lo que resulte probado en el proceso.

**AL 15°. NO ME CONSTA** los supuestos fácticos manifestados por la parte demandante en estos hechos, ya que son situaciones ajenas que no conoce ni debía conocer mi representada, por lo que se estará a lo que resulte probado en el proceso.

**DEL 16° AL 20°. NO ME CONSTA** los supuestos fácticos manifestados por la parte demandante en estos hechos, ya que son situaciones ajenas que no conoce ni debía conocer mi representada, por lo que se estará a lo que resulte probado en el proceso.

**AL 21°.** En cuanto a la remisión hecha del contrato N. 20150051 por parte de la Policía Nacional de Tránsito y Transporte de Villavicencio, no me consta los supuestos fácticos manifestados por la parte demandante en estos hechos, ya que son situaciones ajenas que no conoce ni debía conocer mi representada, por lo que se estará a lo que resulte probado en el proceso.

**DEL 22° AL 23°. NO ME CONSTA** los supuestos fácticos manifestados por la parte demandante en estos hechos, ya que son situaciones



ajenas que no conoce ni debía conocer mi representada, por lo que se estará a lo que resulte probado en el proceso.

**AL 24°. NO ES UN HECHO**, sino meras apreciaciones subjetivas que sostienen que la Policía Nacional de Tránsito de Villavicencio actuó presuntamente de forma inadecuada, afirmación que debe ser probado dentro del proceso.

**DEL 25° AL 26°. NO ME CONSTA** los supuestos fácticos manifestados por la parte demandante en estos hechos, ya que son situaciones ajenas que no conoce ni debía conocer mi representada, por lo que se estará a lo que resulte probado en el proceso.

## **II. EN CUANTO A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.**

En mi calidad de apoderado del Departamento del Meta, en coherencia con lo anteriormente expuesto, me opongo de manera categórica a todas y cada una de las pretensiones formuladas en la demanda, argumentando que la reclamación planteada en esta acción de reparación directa carece de fundamento en lo que respecta a la entidad territorial que represento. Esto se fundamenta principalmente en dos aspectos fundamentales:

Primero, se evidencia una falta de legitimación en la causa por pasiva de esta entidad. Segundo, no se han configurado los elementos necesarios de responsabilidad que permitan imputarle alguna responsabilidad a la Gobernación del Meta.

Por lo anterior, se procede a proponer las siguientes:

## **III. EXCEPCIONES DE MÉRITO O DE FONDO QUE DESESTIMAN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA EN CUANTO A LA GOBERNACIÓN DEL META.**

Además de las excepciones constituidas por los hechos que se prueben dentro del proceso, cuya declaratoria corresponderá oficiosamente al señor juez de conocimiento, conforme a lo normado por el artículo 187 del CPACA, solicito que se declaren probadas las siguientes excepciones de mérito que se proponen a continuación:

### **3.1. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA RESPECTO AL DEPARTAMENTO DEL META.**

En relación con la demanda presentada, es fundamental señalar que las pretensiones formuladas carecen de fundamento jurídico para prosperar contra la entidad que represento. No existe una base legal que vincule a la entidad territorial, Departamento del Meta, con la



indemnización reclamada. Este argumento se sustenta en los siguientes puntos clave.

En lo que respecta a los vehículos inmovilizados por orden judicial, la Corte Constitucional ha dicho que la *“(...) responsabilidad de los vehículos inmovilizados por orden judicial es de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial y no del organismo de tránsito municipal”* ni departamental.

A su vez, el artículo 167 del Código Nacional de Tránsito Terrestre estipula que *“los vehículos que sean inmovilizados por orden judicial deberán llevarse a parqueaderos cuya responsabilidad será de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial”*.

Estos puntos demuestran que las operaciones administrativas relacionadas con la inmovilización de vehículos por orden judicial no son responsabilidad de la entidad territorial, sino de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial. Por lo tanto, cualquier actuación dañosa derivada de la inmovilización de automotores por orden judicial debe ser asumida exclusivamente por la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial, y no por la entidad que represento.

Es crucial exponer que los directores Seccionales de Administración Judicial son los encargados de dar las autorizaciones a los establecimientos comerciales que prestan el servicio de parqueo para vehículos embargados por orden judicial, según el decreto 2586 de 2004.

Esta normativa y jurisprudencia señalada demuestra con claridad que los riesgos y las responsabilidades surgidas de las actividades de inmovilización o aprehensión de automotores por medidas cautelares están en cabeza de la Direcciones Seccionales de Administración Judicial y no a alguna entidad territorial.

En esta ocasión, es preciso señalar que los daños resultantes de la pérdida del vehículo embargado, debido a la falta de cuidado y control en los parqueaderos y a la defectuosa función de la administración de justicia, son una responsabilidad que recae, esencialmente, en las Direcciones Ejecutivas de Administración Judicial y no en el ente territorial.

Respecto a la falta de legitimación en la causa por pasiva, la Sala Civil Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado lo siguiente:

*“La legitimación en causa, por su parte, hace referencia a la necesidad de que entre la persona que convoca **o es convocada al pleito y el derecho invocado exista un vínculo que legitime esa***



**intervención, de suerte que el veredicto que se adopte les resulte vinculante.** Ha sido insistente esta Corporación al calificarlo como un presupuesto de la acción, cuya ausencia impide aproximarse al fondo de la contienda, trayendo aparejado la desestimación de lo pedido.

*Esa legitimación la deben ostentar tanto la parte demandante (activa) que le permita accionar, como la demandada (pasiva) para enfrentar los reclamos, pudiendo ser cuestionada mediante la interposición de la correspondiente excepción previa, e incluso de oficio y que de hallarse probada podrá ser declarada mediante sentencia anticipada en cualquier estado del proceso.*  
(...)

*El nexo que une a las partes, permitiendo a la una accionar y a la otra responder a tales reclamos, es lo que se conoce como legitimación en la causa. Su importancia es tal, que no depende de la forma como asuman el debate los intervinientes, sino que el fallador debe establecerla prioritariamente en cada pugna al entrar a desatar la litis o, en casos excepcionales, desde sus albores.*

*De no cumplirse tal conexión entre quienes se traban en un pleito, se presentaría una restricción para actuar o comparecer, sin que se trate de un aspecto procesal susceptible de subsanación, sino que, por su trascendencia, tiene una connotación sustancial que impide abordar el fondo de la contienda.”<sup>1</sup>*

Así, la legitimación en la causa por pasiva se da cuando entre el demandado y el derecho reclamado existe un nexo que legitime esa intervención y que esté unido o relacionado con las pretensiones de la demanda, las cuales contiene el querer del demandante y su objeto último que busca sea realizado en la sentencia.

Al final, es evidente que no puede involucrarse en un proceso a un sujeto al cual el resultado de la disputa no le afectará en lo más mínimo, dado que no tendrá consecuencias legales para él.

Este es precisamente el caso en cuestión, ya que el demandante busca el reconocimiento de una indemnización derivada de unos hechos que no fueron ocasionados y no tuvieron que ver con las actuaciones propias de la entidad territorial.

En virtud de lo expuesto, resulta imperativo desvincular a la Gobernación del Meta del presente proceso, dado que no es la entidad competente para analizar y reconocer, en caso de proceder, la indemnización solicitada por la parte actora.

---

<sup>1</sup> Sentencia SC 2215-2021 de 9 de junio de 2021 emitida por la Sala Civil Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia. MP: Francisco José Ternera.



Ante la falta de legitimación en la causa por pasiva de mi representada, y conforme al numeral 3° del artículo 182 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), solicito respetuosamente que el juez dicte sentencia anticipada en esta oportunidad, tal y como lo orden dicho precepto.

### **3.2. INEXISTENCIA DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FRENTE AL DEPARTAMENTO DEL META.**

Fundamento la anterior excepción en los siguientes aspectos:

#### **- ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia "El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las entidades públicas", norma superior, que ha sido entendida por la Corte Constitucional, de la siguiente manera:

*"(...) Coincidiendo con la línea doctrinal elaborada por el Consejo de Estado, en la sentencia C-333 de 1996, la Corte Constitucional se pronunció sobre el verdadero alcance de esta norma, aclarando que la misma, al margen de establecer el imperativo jurídico de la responsabilidad estatal, consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y omisiones de los entes públicos y, por tanto, se proyecta indistintamente en el ámbito extracontractual, precontractual y contractual.*

*Es así como no se consagra en el artículo 90 de la Carta un criterio restringido de responsabilidad como se pudo interpretar por algunos sectores, circunscrito únicamente al campo extracontractual, ya que, según lo expresado, de lo que se encarga su texto es de fijar el fundamento de principio en el que confluyen todos los regímenes tradicionales de responsabilidad estatal, esto es, el contractual, el precontractual y el extracontractual (...)"<sup>2</sup>*

Expuesto lo anterior en punto a la conceptualización de la responsabilidad extracontractual del Estado que es la que nos ocupa en el presente proceso, resulta importante entrar a analizar en el siguiente acápite los elementos de dicha tipología de responsabilidad.

#### **- ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.**

En el presente asunto tal como lo viene indicando la Corte Constitucional de cara a los elementos que configuran la responsabilidad del Estado, ha señalado esta corporación así:

*"(...) Principalmente, en el artículo 90 de la Constitución se instituyó la cláusula general de responsabilidad del Estado,*

---

<sup>2</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-644 de 2011, 31 de agosto de 2011, M.P. JORGE IVÁN PALACIO.



*mediante el establecimiento de diversas formas de imputación de responsabilidad, a saber: la responsabilidad contractual, extracontractual y la de los servidores públicos. En virtud de esta disposición el Estado es patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes y, para lo cual, deben concurrir tres elementos ciertos: (i) la actuación de la administración, (ii) el daño antijurídico y (iii) el nexo causal entre la actuación de la administración y el daño que se produce (...)”<sup>3</sup> (destacado fuera de texto original)*

En síntesis, de acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional, los elementos de la responsabilidad son: i) una conducta por acción o por omisión que se tenga como antijurídica imputable a la administración, cuya imputación sea bien por responsabilidad objetiva o subjetiva, como se señaló antes; en segundo lugar, ii) es necesario que se constituya un daño o perjuicio a la víctima en su esfera patrimonial o fuera de esta, que la misma no tenga el deber de soportar y, en tercer lugar, iii) que haya una relación de causalidad entre el daño sufrido por la víctima y la conducta de la administración. Es importante mencionar que la carga de la prueba de estos anteriores elementos se encuentra a cargo de la parte demandante.

No obstante, en esta oportunidad hay que entrar señalando que no existe alguna responsabilidad extracontractual en cabeza de la Gobernación del Meta, como pretende hacerlo entender de manera injustificada y equivocada la parte demandante, pues no se configuran TODOS y cada uno de los elementos esenciales de la responsabilidad del Estado que fueron expuestos anteriormente.

#### - AUSENCIA DE PRUEBA DE LOS PRESUNTOS DAÑOS CAUSADOS.

En cuanto a este elemento trascendental, no obra dentro del expediente prueba alguna que acredite que cada uno de los daños que se mencionaron en la demanda. No se evidencia la causación de algún daño material e inmaterial en cabeza de la parte demandante.

En relación con el perjuicio moral, la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado ha definido el mismo en los siguientes términos:

“(...) La Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corporación, mediante sentencias del 28 de agosto de 2014, sintetizó el concepto de daño moral en aquel que se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo (...)”<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Corte Constitucional, Sentencia T-535 de 2015, 20 de agosto de 2015, M.P. ALBERTO ROJAS RÍOS.

<sup>4</sup> Consejo de Estado, Sección tercera, Subsección C. Sentencia del 18 de mayo de 2017, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.



Vale la pena resaltar que, aunque por regla general la evaluación monetaria de los perjuicios extrapatrimoniales es imposible dada la naturaleza del mismo daño, la existencia e intensidad de éste, es perfectamente verificable, gracias a los alcances actuales de la psicología y de la medicina.

Razón por la cual, resalta en el caso de la referencia que no se allegue, prueba siquiera sumaria, encaminada a probar idóneamente la afectación psicológica, así como emocional que ha causado a los actores de esta acción constitucional, las consecuencias del incidente acaecido y que dio lugar a esta demanda.

Así pues, en el entendido de que no se ha probado dicho daño, no es posible reconocer algún perjuicio moral para ninguno de los interesados ni mucho menos alguna indemnización referente a los daños materiales, ya que estos tampoco se han probado.

- INEXISTENCIA DEL NEXO CAUSAL.

En el presente proceso no existe prueba alguna de un comportamiento negligente incurrido por parte de dicha entidad demandada – Gobernación del Meta -. Así mismo, no se configura prueba sobre la existencia de un nexo causal de alguna conducta dañosa del departamento que represento y el supuesto daño o perjuicio que se alega haber sufrido la parte actora. Hay que recordar que, en todo caso, la acreditación de los elementos de la responsabilidad, ya referidos, se encuentran a cargo de la parte demandante.

En esta ocasión, todos las fallas imputadas en la acción de reparación directa no relacionan o conectan que alguna conducta del Departamento del Meta haya sido la causa incidente en los presuntos daños indicados en la demanda.

En virtud de lo expuesto, no sería procedente atribuir responsabilidad subjetiva u objetiva a la Gobernación del Meta, dado que no se evidencia ningún comportamiento indebido que justifique alguna imputación en contra de esta.

**IV. FRENTE A LAS PRUEBAS SOLICITADAS.**

- **En lo que respecta al interrogatorio de parte.**

Se solicita la fijación de la fecha para el interrogatorio de parte de JACINTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, con domicilio en la ciudad de Bogotá e identificado con el número de cédula de ciudadanía C.C. 19.230.738, con el fin de que se pueda realizar el ejercicio de contradicción.



- **Respecto a la solicitud de pruebas de oficio.**

En cuanto a la solicitud de pruebas de oficio hecha en la demanda, a fin de que se expidieran las constancias de los viajes de pagos por concepto de transporte entre el vehículo desaparecido y las mencionadas empresas, se considera que es improcedente dicha solicitud teniendo en cuenta que esta tuvo que haberse realizado mediante el ejercicio del derecho fundamental y constitucional de petición, más no en la demanda.

Debido a lo expuesto, se solicita que se desestime esta solicitud ya que no se ejerció de forma oportuna el derecho de petición ante las autoridades administrativas en comento.

**V. ANEXOS.**

- Poder especial otorgado al suscrito apoderado y mensaje de datos mediante el cual se confiere el mismo al apoderado.
- Acta de posesión de la Secretaría Jurídica de la Gobernación del Meta.

**VI. NOTIFICACIONES.**

**APODERADO DE LA DEMANDADA.**

El suscrito apoderado recibe notificaciones en carrera 17 No. 93-82, oficina 204 en Bogotá D.C., así como en los correos electrónicos [jftejeiro@tdbabogados.com](mailto:jftejeiro@tdbabogados.com) y [juanftejeiro@hotmail.com](mailto:juanftejeiro@hotmail.com)

Con toda atención y respeto,

---

**JUAN FELIPE TEJEIRO CARRILLO**

C.C. 1.121.912.541

T.P. 308.777 del C.S.J.

[jftejeiro@tdbabogados.com](mailto:jftejeiro@tdbabogados.com); [administrativo@tdbabogados.com](mailto:administrativo@tdbabogados.com)